



Serie ocasional de políticas y legislación

Año I No.1 Mayo 2007

El Tratado Internacional de la FAO sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura: Aportes para su Aplicación e Implementación en el Perú

*Manuel Ruiz**

Nota del autor

Este documento es el primero de una serie de cuatro números que abordarán temas de mucha importancia para el Perú. Estos incluyen la agrobiodiversidad, el acceso a los recursos genéticos, la propiedad intelectual, los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, entre otros.

El objetivo de esta serie ocasional es facilitar a los que toman decisiones políticas y otros actores trabajando en el área de desarrollo rural e interesados en estos temas, informar y proponer recomendaciones para la generación e implementación de mejores y más efectivas políticas y normas.

Para ello la serie presenta un formato simple y se aborda los temas en un lenguaje sencillo sin sacrificar la precisión, la profundidad ni los contenidos sustanciales.

Este primer número de la serie titulado *El Tratado Internacional de la FAO sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura: Aportes para su Aplicación e Implementación en el Perú*, no constituye un documento analítico sino, por el contrario, busca describir los antecedentes y contenidos básicos del Tratado y reflejar de alguna forma los avances en su implementación en el ámbito nacional. Incluye también recomendaciones finales para promover su más efectiva aplicación en el país.

Esta serie es parte del proyecto *Apoyo a la Implementación del Tratado Internacional de FAO en el Perú* que ejecuta la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en cooperación con el Fridtjof Nansen Institute de Noruega (FNI), el Grupo Yanapai y el Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) de Alemania. Esta serie cuenta también con el apoyo del Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).



Introducción

El Perú ratificó el Tratado Internacional mediante Decreto Supremo 012-2003 RE el 27 de enero de 2003.¹

El Tratado Internacional es el esfuerzo más reciente por intentar darle al tema del acceso a los recursos genéticos un marco normativo e institucional que permita implementar los principios básicos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) – soberanía, distribución justa y equitativa de beneficios - en este caso aplicados a un conjunto muy importante de recursos – recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.

Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura son recursos críticos y fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria de la población mundial y apoyar el Derecho a la Alimentación. Si bien algunos países como el Perú son centros de origen y de diversificación de muchos recursos genéticos (incluyendo aquellos para la alimentación y agricultura), todos los países del mundo son *interdependientes* en cuanto a los recursos que sus agriculturas utilizan, promueven, contribuyen y desarrollan.²

¹ El Tratado fue adoptado durante la Trigésima Primera Sesión de la Conferencia de la FAO el 3 de noviembre de 2001 y entró en vigor el 29 de junio de 2004.

² En el caso del Perú por ejemplo, la agricultura en su conjunto depende en más de un 60% de recursos fitogenéticos introducidos, que no son originarios ni nativos al país. Por ejemplo, arroz, caña de azúcar, trigo, cebada, espárragos, alfalfa, mangos, etc., muy importantes para nuestra agricultura desde una perspectiva del comercio. La dependencia de otros países y regiones es a veces mayor.

*Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. El autor agradece los comentarios y aportes de: Annette Von Lossau, Regine Andersen y María Scurrah. Así como también a Juan Torres por las fotos proporcionadas.

En el caso de la conservación de la biodiversidad y la investigación y el desarrollo de recursos genéticos en el campo de la farmacéutica, la cosmética, la bioindustria (por ejemplo en la industria de los alimentos), la bioremediación (por ejemplo en el área del combate a la contaminación), es más sencillo plantear reglas y obligaciones sobre acceso y distribución de beneficios en términos bilaterales entre los países. Por el contrario, en el caso de la agrobiodiversidad y recursos orientados para la alimentación y la agricultura, esta interdependencia que se ha señalado exige una solución diferente, que priorice el flujo permanente, el intercambio y la colaboración entre los países, por sobre las restricciones y el control. La agricultura en todos los países del mundo se ha desarrollado a lo largo de los siglos a partir de este intercambio y flujo de recursos.

Como consecuencia de esta situación especial de la agricultura, el Tratado Internacional propone como punto central y crítico de su contenido, un Sistema Multilateral de Acceso y Distribución de Beneficios, que será analizado en detalle más adelante.

Breves antecedentes y el contexto internacional del Tratado Internacional

El Compromiso Internacional de Recursos Fitogenéticos de 1983 fue el primer instrumento legal internacional que abordó de manera directa el tema del acceso y control de los recursos fitogenéticos. Pese a su naturaleza no vinculante, determinó el marco político y conceptual a partir del cual el debate sobre el acceso, control y los derechos sobre los recursos fitogenéticos en particular se profundizó y expandió y permitió a los países en desarrollo poseedores de la biodiversidad reivindicar sus derechos, intereses y expectativas.

El Compromiso reconoció el principio universalmente aceptado – en ese momento – que los recursos genéticos (y fitogenéticos en particular) eran parte del patrimonio o la herencia común de la humanidad y respecto de los cuales no eran posibles derechos particulares.

A lo largo de la década de los años 80, el Compromiso fue adoptando resoluciones que interpretaban varios de sus principios, siendo tal vez la más importante la Resolución 4/89 y 3/91 que indicaron que los derechos de obtentor no eran incompatibles con el Compromiso y que la idea de libre acceso propuesta por la noción de patrimonio o herencia común no implicaba acceso libre de costo, y que los Derechos del Agricultor son un componente crítico de este instrumento internacional, respectivamente.

A principios de los años 90 se estaban culminando las negociaciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Originalmente concebido como un convenio esencialmente “verde” orientado a proteger la biodiversidad del planeta, las discusiones pronto incorporaron las expectativas e intereses de los países en desarrollo alrededor de temas tales como acceso y control sobre los recursos genéticos y la propiedad intelectual. En efecto, el CDB estableció como sus objetivos: conservar la diversidad biológica, utilizar sosteniblemente sus componentes y compartir de manera justa y equitativa los beneficios derivados del acceso y uso de los recursos genéticos (con los países de origen). En ese sentido, incorporó un artículo completo (el artículo 15) para abordar el tema del acceso a los recursos genéticos, la distribución de beneficios, el reconocimiento a la soberanía estatal, los principios



del consentimiento fundamentado previo, los términos mutuamente convenidos, entre otros. Asimismo, incorporó artículos y referencias específicas a la biotecnología, la transferencia tecnológica y la propiedad intelectual (artículos 16 y 19). Como resultado del CDB y muy rápidamente, muchos países adoptaron y empezaron a desarrollar normas específicas en materia de acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios.³

La propia dinámica del CDB ha generado nuevos procesos e iniciativas que incluyen: la reacción del Grupo de Países Megadiversos Afines,⁴ la adopción de las Directrices de Bonn sobre Acceso a los Recursos Genéticos y la Distribución Justa y Equitativa de Beneficios⁵ y el lanzamiento de un nuevo proceso de negociación orientado a crear un régimen internacional de acceso a los recursos genéticos.⁶ Sumado a ello, el CDB dio impulso al proceso de revisión del Compromiso Internacional y su adecuación a las nuevas reglas de acceso y distribución de beneficios, dando como resultado la generación y adopción del Tratado Internacional.

Elementos centrales del Tratado Internacional: ¿cómo va a operar en la práctica?

A continuación se presenta un breve resumen de los principales elementos, principios y obligaciones que impone el Tratado Internacional.⁷

El objetivo del Tratado Internacional es la conservación y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de beneficios derivados de su utilización.

El Tratado establece que las Partes Contratantes deben adoptar medidas para promover la realización de estudios e inventarios, la realización de actividades de recolección, la ejecución de acciones para apoyar los esfuerzos de los pequeños agricultores, la implementación de medidas orientadas a la conservación *in situ*, entre otros.

Asimismo, las Partes Contratantes tienen la responsabilidad de promover el uso sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, fortalecer las actividades de investigación y conservación de recursos fitogenéticos, promover actividades de fitomejoramiento con pequeños agricultores, fomentar el uso de especies subutilizadas, entre otras.

Uno de los temas importantes del Tratado es el referido a los Derechos del Agricultor. Los Derechos del Agricultor son el resultado del reconocimiento de la contribución hecha por los pequeños agricultores a lo largo del tiempo, especialmente en centros de origen y diversidad, a la conservación y desarrollo de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.

En ese sentido, las Partes Contratantes tienen la responsabilidad de hacer realidad los Derechos del Agricultor en el ámbito nacional, en particular a través de la protección de los conocimientos tradicionales relacionados con los recursos fitogenéticos, el reconocimiento del derecho a participar de manera justa y equitativa en los beneficios que se derivan del uso de estos recursos y del derecho de participar en los procesos políticos nacionales relacionados con la conservación y uso sostenible de los mismos⁸. Asimismo, los Derechos del Agricultor implican no limitar el derecho de los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender materiales de siembra y reproducción, de conformidad con la legislación.⁹

³ Para mayores detalles sobre los países que han adoptado legislación y políticas en materia de acceso se sugiere revisar: Carrizosa, S., Brush, S., Wright, B., McGuire, P. (Eds.) 2004. *Accessing Biodiversity and Sharing the Benefits: Lessons from Implementing the Convention on Biological Diversity*. IUCN Environmental Policy and Law Paper 54. IUCN Environmental Law Programme, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, United Kingdom.

⁴ El Grupo de Países Megadiversos Afines, que incluye a los países que concentran más del 75% de la biodiversidad *in situ* del planeta, se estableció mediante la Declaración de Cancún de febrero de 2002. Son miembros de este Grupo: Bolivia, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, India, Indonesia, Kenia, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y Venezuela).

El Grupo tiene por objetivo central coordinar políticas y acciones comunes orientadas a fortalecer las posiciones de negociación en materia de biodiversidad en los diferentes foros internacionales – especialmente en materia de acceso a los recursos genéticos y la protección de los conocimientos tradicionales.

⁵ Estas Directrices son un instrumento no vinculante adoptado mediante Decisión VI/24

(La Haya, Holanda, 2002) y que establece una suerte de menú de opciones que los países pueden considerar al momento de embarcarse en procesos políticos y normativos en materia de acceso a los recursos genéticos.

⁶ La idea de impulsar un proceso político para negociar un régimen internacional fue originalmente propuesta por el Grupo de Países Megadiversos Afines en el año 2002. En sucesivos foros, el Grupo ha insistido con esta propuesta hasta que mediante Decisión VII/19 de la COP del CDB (Kuala Lumpur, Malasia, 2004) se oficializó el lanzamiento de este proceso. Para una revisión crítica de este proceso ver: Ruiz, Manuel. *The International Regime on Access to Genetic Resources: In Search of the Right Path*. Policy and Environmental Law Series. Peruvian Society for Environmental Law. No. 17, January 2006, Lima, Peru. Disponible en: <http://www.spda.org.pe>

⁷ Para mayores detalles sobre el Tratado Internacional, sus contenidos y proceso de implementación a la fecha se recomienda revisar :

Moore, Gerald, Tymowski, Wytołd. *Explanatory Guide to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*. Environmental Policy and Law Paper No. 57. IUCN The World Conservation Union (IUCN), 2005. También se sugiere:

Andersen, Regine. *Governing Agrobiodiversity: International Regimes, Plant Genetics and Developing Countries*. Department of Political Sciences, University of Oslo. 2007.

⁸ Ruiz , Manuel (2006). *Farmers Rights in Peru - a Case Study*.A Case Study, Background Study 3 from the Farmers Rights Project, FNI Report 5/2006 (Lysaker, Norway, The Fridtjof Nansen Institute

⁹ Es importante señalar que en el campo de la legislación nacional, la legislación de semillas (en el caso del Perú la Ley 27262 y su reglamento el Decreto Supremo 040-2001-AG) puede estar teniendo un efecto perverso al afectar prácticas tradicionales de intercambio libre de semillas entre los agricultores – al proponer un proceso de «formalización» de las semilla y su eventual certificación.

Un segundo elemento central del Tratado es el Sistema Multilateral de Acceso y Distribución de Beneficios. Este Sistema se constituye a partir de las facultades soberanas que tienen los Estados sobre sus recursos fitogenéticos. En ese sentido y en el ejercicio de esas facultades, los Estados deciden y acuerdan establecer un Sistema Multilateral de acceso facilitado y distribución de beneficios. Las reglas y principios del Sistema Multilateral se aplican exclusivamente a los recursos incluidos en la lista establecida en el Anexo I¹⁰ y que se encuentran bajo la administración y control de las Partes Contratantes y son de dominio público. Es decir, se excluyen recursos sobre los que pudieran existir derechos de propiedad privada, incluyendo propiedad intelectual pero se incluyen los recursos fitogenéticos del Anexo I que se encuentran en los Centros Internacionales de Investigación Agrícola.

En el contexto de este Sistema el acceso a los recursos fitogenéticos se facilitará solamente para fines de investigación, mejoramiento y capacitación en alimentación y agricultura siempre que ello no implique aplicaciones farmacéuticas, químicas u otras. Para recursos con usos múltiples, su importancia para la seguridad alimentaria será el determinante para su inclusión en el sistema de acceso facilitado. El acceso se proporcionará de manera rápida y gratuita, sin necesidad de averiguar el origen de cada muestra.

Como elemento saltante dentro del Sistema, los receptores de estos recursos fitogenéticos no reclamarán derechos de propiedad intelectual sobre dichos recursos o sus componentes que limiten el acceso facilitado, en la forma recibida del Sistema Multilateral. ¿Qué significa exactamente “en la forma recibida”? Este es un punto que aún es objeto de debate. Mientras algunos países sostienen que los recursos fitogenéticos como tales no pueden ser objeto de propiedad intelectual, su mejoramiento o componentes de los mismos sí podrían serlo. Otros países por el contrario, sostienen que la letra y espíritu del Tratado busca impedir la concepción de derechos en cualquiera de los casos antes mencionados.

Por su parte, el acceso a recursos de la lista en condiciones *in situ*, se realizará de conformidad con la legislación nacional, sin perjuicio de las normas y disposiciones del Tratado. El acceso se facilitará mediante la utilización de un Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material aprobado por el Órgano Rector.

En relación a la distribución de beneficios, el acceso facilitado constituye de por sí un primer beneficio importante. La distribución de beneficios se materializará a través de: el intercambio de información, el acceso a tecnología y su transferencia, el fomento de capacidades y la distribución de beneficios monetarios y de otro tipo. Estos beneficios deben canalizarse, primordialmente a los agricultores de países en desarrollo que conservan y usan sosteniblemente recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.

Finalmente, los Centros Internacionales de Investigación Agrícola del Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional mantienen importantes colecciones *ex situ* de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Estos recursos (aquellos incluidos en el Anexo I) se pondrán a disposición de conformidad con las reglas y principios del Sistema Multilateral – incluyendo mediante la aplicación del Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material. Los centros internacionales firmarán acuerdos con el Órgano Rector para poner sus colecciones bajo el ámbito del mismo.

¹⁰ Esta lista incluye una relación taxativa de cultivos comprendidos en el Sistema Multilateral. Incluye 35 especies para la alimentación y algunas industriales y 29 forrajes.

Algunos avances en el proceso político y normativo en el Perú

En los últimos años, el Perú ha avanzado en términos de la generación de políticas públicas y normas en materia de agrobiodiversidad y sus diferentes componentes. También se han dado algunos progresos en el proceso de implementación y aplicación del Tratado Internacional. No necesariamente desde su entrada en vigor sino desde años antes, el Perú ha generado una serie de mecanismos, instrumentos, normas y procesos que en la actualidad son, sin duda, avances en términos de aplicación de los contenidos sustantivos del Tratado, especialmente en el campo del acceso a los recursos genéticos, la protección de los conocimientos tradicionales, la conservación de la agrobiodiversidad y la bioseguridad.

Entre los ejemplos más importantes de esfuerzos institucionales y normativos de aplicación en el campo de la conservación, uso sostenible y el desarrollo de esfuerzos a partir de proyectos concretos, pueden mencionarse:



Ley 26839, Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica (16-7-1996). Esta es la norma general para la conservación de la biodiversidad en el Perú e incluye referencias específicas a la agrobiodiversidad. En particular, su Reglamento (el Decreto Supremo 068-2001) dispone la creación de zonas de agrobiodiversidad para promover la conservación *in situ* – especialmente en la chacra – de la agrobiodiversidad, a nivel de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.¹¹

Ley 27104, Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología (12-5-1999). Esta norma y su Reglamento constituyen una salvaguarda contra la introducción no controlada de organismos transgénicos al país. Tiene por finalidad garantizar niveles adecuados de conservación de la rica y variada riqueza biológica domesticada y silvestre que tiene el país.

Decreto Supremo 102-2001-PCM, Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (5-9-2001). Este es el instrumento principal de ordenamiento y planificación de la biodiversidad. Incluye acciones específicas en el campo de la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad.

Ley 27811 para la Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Relacionados con la Diversidad Biológica (10-9-2002). Esta norma constituye un esfuerzo por implementar los Derechos del Agricultor en el campo de la protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas (incluyendo comunidades de agricultores) relacionados con la biodiversidad en general. Establece una serie de mecanismos e instrumentos (licencias, registros, fondo, etc.) para proteger el esfuerzo intelectual de los grupos indígenas relacionados con esta biodiversidad, incluyendo la agrobiodiversidad.¹²

Resolución Ministerial 505-2003-AG, Reglamento sobre Ferias y Eventos Agropecuarios. Esta norma busca promover espacios en los cuales los agricultores puedan intercambiar productos y semillas y ofrecer sus productos a los consumidores especialmente locales y regionales.

Ley 28216, (2004) Ley de Prevención de la Biopiratería. Ante la evidencia de numerosos casos de usos ilegales e irregulares de recursos de la biodiversidad nacional (y los conocimientos tradiciona-

¹¹ Estas zonas de agrobiodiversidad tienen por objetivo garantizar que, a partir del mantenimiento de la cultura indígena y prácticas ancestrales de manejo y gestión de la chacra y, especialmente de los cultivos nativos y sus parientes silvestres, se conserve la agrobiodiversidad en su conjunto. Entre los incentivos para crear estas áreas podrían considerarse: premiar a los agricultores conservacionistas, prohibir el ingreso y uso de cultivos transgénicos, promover investigación y mejoramiento participativo, etc.

¹² En el caso de la Ley 27811, si bien no tiene referencias explícitas a los Derechos del Agricultor, en la medida que protege conocimientos asociados a la biodiversidad (incluidos conocimientos campesinos sobre cultivos nativos por ejemplo), es posible interpretar que se trata de una norma de implementación de estos derechos en el ámbito nacional.

les asociados), especialmente a partir de la aplicación de derechos de propiedad intelectual, se crea la Comisión Nacional de Prevención de la Biopiratería liderada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para coordinar acciones de prevención y defensa de los intereses nacionales.¹³

Ley 28477, (2005) Ley que declara a los cultivos y crianzas nativas y especies silvestres usufructuadas Patrimonio Natural de la Nación. Esta norma establece que los cultivos y crianzas nativas y especies silvestres son parte del Patrimonio Natural de la Nación y que corresponde al Ministerio de Agricultura en coordinación con otras instancias públicas y el sector privado, registrarlas, promoverlas, conservarlas, comercializarlas y promover su consumo en general. Esta Ley incluye una lista de cultivos nativos con sus nombre científicos y comunes.

Decreto del Consejo Directivo 022-2004/CONAM/CD, Aprueban Programa Nacional de Agrobiodiversidad (26-9-2004). Este documento es el primer esfuerzo coordinado por definir un programa nacional coherente orientado a promover, conservar y utilizar sosteniblemente la agrobiodiversidad en el país.

Decreto de Consejo Directivo 020-2005-CONAM/CD, Creación de Grupo Técnico Nacional sobre Recursos Genéticos. Este Grupo Técnico tiene por finalidad establecer un espacio de discusión multisectorial para la definición de políticas y medidas en materia de acceso a recursos genéticos en general.

Proyecto Iniciativa de Políticas de Recursos Genéticos (GRPI Perú). Este proyecto impulsado por Bioversity International (otrora el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos – IPGRI) y coordinado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, busca apoyar en la generación de políticas públicas en materia de recursos genéticos, zonas de agrobiodiversidad y en la implementación del Tratado Internacional en el Perú.

Proyecto del Parque de la Papa. Esta iniciativa impulsada por la Asociación Andes del Cusco (que se concentra en seis comunidades de la zona de Pisac), es un esfuerzo por crear una zona de agrobiodiversidad en la cual se mantienen culturas vivas, recursos fitogenéticos y cultivos nativos, técnicas agrícolas ancestrales y los conocimientos tradicionales de estas comunidades a partir de la creación de un registro local).¹⁴

En este punto es importante señalar que en relación al marco legal nacional de acceso a los recursos genéticos (previsto en la Decisión 391 de la Comunidad Andina sobre un Régimen Común Acceso a los Recursos Genéticos), todavía dudas sobre el alcance de este régimen frente al ámbito y materia más específica propuesto por el Tratado Internacional y las reglas del Sistema Multilateral en materia de acceso.

Todos estos son ejemplos de esfuerzos tendentes a implementar determinados aspectos del Tratado Internacional y cumplir con algunas de sus disposiciones específicas en materia de conservación en general, uso sostenible de recursos fitogenéticos, implementación de los Derechos del Agricultor, entre otros.¹⁵

Sin embargo, no hay necesariamente un esfuerzo sistemático, integrado y continuo de diseminación, concientiación y, en última instancia, de aplicación del Tratado Internacional. En ese sentido, a continuación se plantean algunas sugerencias prácticas de cómo avanzar en estos esfuerzos.

¹³ Para conocer casos de biopiratería sobre recursos de origen peruano se recomienda revisar: Comisión Nacional de Prevención de la Biopiratería. *Análisis de Potenciales Casos de Biopiratería en el Perú*. Comisión Nacional contra la Biopiratería, SPDA. Año I, No. 3, septiembre 2005. Disponible en: <http://www.biopirateria.org>

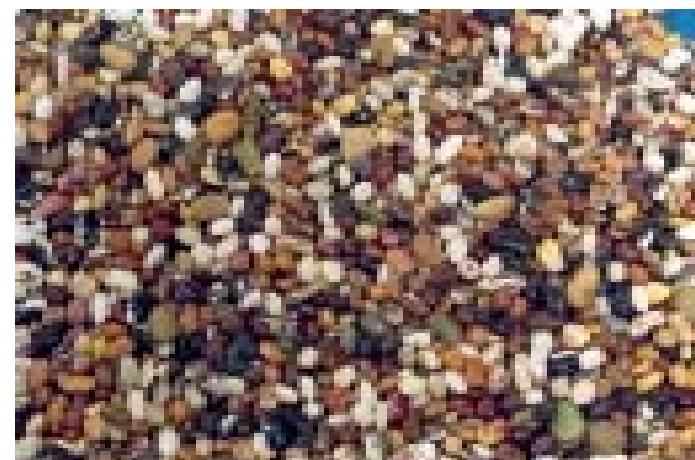
¹⁴ El Parque de la Papa en el Cusco es un ejemplo de una zona de agrobiodiversidad (ver: <http://www.andes.org.pe>).

¹⁵ Hay muchos otros ejemplos de proyectos en el país que, a veces sin saberlo, se encuentran implementando los Derechos del Agricultor. En ese sentido, un reciente esfuerzo del CIP para catalogar papas de Huancavelica, ha implicado un esfuerzo por dialogar y solicitar a los campesinos su consentimiento para la sistematización y organización del catálogo y la información derivada.

Recomendaciones para el fortalecimiento del proceso de implementación del Tratado Internacional en el Perú

1. El Tratado Internacional de la FAO es aún muy poco conocido entre a mayoría de actores que tienen intereses relacionados con el acceso y uso de recursos fitogenéticos e interactúan con comunidades indígenas del país. Desde instancias gubernamentales hasta los pequeños agricultores y centros de investigación, poco o nada se conoce sobre las implicancias y posibilidades que plantea el Tratado. En ese sentido, es conveniente *iniciar un proceso de difusión de sus contenidos entre un espectro amplio de actores y grupos de interés-particularmente entre : políticos, sector privado y comunidades de campesinos y agricultores.* Para ello, los medios (reportajes, artículos, programas de radio, documentales televisivos, etc.) pueden jugar un papel muy importante. Asimismo, a través de talleres, conversatorios descentralizados, difusión de boletines, entre otros, se podría informar y comunicar a un amplio espectro de actores sobre la existencia y los contenidos del Tratado. En términos más específicos, el Consejo Nacional del Ambiente y el propio Instituto Nacional de Investigación Agraria tendrían la responsabilidad de impulsar este esfuerzo desde el nivel oficial. Organizaciones como la SPDA e incluso en el marco de las actividades que en el ámbito nacional realizan GTZ, Biodiversity International, el CIP y COSUDE, pueden también contribuir en este proceso.
2. El Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), la Coordinadora Nacional para el Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) y el propio CONAM, deben *iniciar acciones coordinadas y puntuales para contribuir al proceso de difusión y concretamente para la aplicación efectiva del Tratado en el ámbito nacional.* Se sugieren en ese sentido acciones tales como:
 - a. Definir expresamente a la autoridad nacional competente en materia de aplicación y seguimiento del Tratado Internacional,
 - b. Solicitar a la Comunidad Andina la adopción de una Decisión que exceptúe expresamente a los recursos del Anexo I de las reglas y procedimientos establecidos en la Decisión 391 sobre un Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos,
 - c. Incorporar el Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material a la práctica regular y cotidiana de instituciones nacionales que mantienen recursos del Anexo I. Estas instituciones incluyen centros ex situ, centros de investigación, jardines botánicos y otros ,
 - d. Ejecutar (a través de CONAM, INIA y el propio Ministerio de Relaciones Exteriores) un proceso de capacitación intensivo entre funcionarios del sector público (especialmente de sus propias instituciones) a fin que conozcan y entiendan las implicancias del Tratado y sus disposiciones,
 - e. Establecer un mecanismo para verificar y obligar al cumplimiento de las disposiciones del Tratado Internacional y los Derechos del Agricultor en particular y preparar un informe anual o bianual para su discusión en el marco de instancias tales como la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB), el Sub Grupo de Trabajo sobre Acceso a los Recursos Genéticos y otras instancias o espacios relevantes que pudieran contribuir con ideas y sugerencias para un mejor proceso de implementación. Esto podría incluir una evaluación de cómo la liberalización comercial (a partir del Tratado de Libre Comercio con EEUU o las propias reglas de la OMC) impacta en los esfuerzos por promover y mantener procesos de intercambio tradicional de semillas, o si la tendencia y presión por introducir semillas genéticamente modificadas puede generar impactos ambientales, sociales o económicos entre pequeños agricultores, entre otros temas.
 - f. Hacer un seguimiento riguroso –a través de la Misión del Perú en Ginebra- de los avances en los procesos políticos a nivel de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que tienen relación con elementos centrales del Tratado Internacional tales como los Derechos del Agricultor, protección de los conocimientos tradicionales y acceso a los recursos genéticos y preparar oportunamente posiciones de país.

- g. *Disseminar información* relevante sobre el Tratado Internacional en general entre los miembros de los principales gremios agrícolas (del sector privado). La SPDA podría preparar una lista preliminar de estas empresas y remitirles materiales tales como el presente documento, informes de la propia GTZ (sus conocidas “Hojas Temáticas”), entre otros.
3. La Red Nacional de Centros de Conservación *Ex Situ* (especialmente en el caso de bancos de semillas que mantienen recursos incluidos en la lista del Tratado) debe iniciar un proceso de internalización de las disposiciones del Tratado Internacional y del propio Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material a fin de propiciar su aplicación según sea el caso, dependiendo del status legal de sus colecciones y sus posibilidades institucionales.



The FAO International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: Contributions for its Application and Implementation in Peru

*Manuel Ruiz**

Note from the Author

This document is the first of a series of four papers which will address a number of important and relevant issues for Peru and the region, including agrobiodiversity, access to genetic resources, intellectual property, traditional knowledge of indigenous peoples, among others.



The purpose of this series is to provide decision makers and other actors working in the field of rural development with information and recommendations for the generation and implementation of improved and effective norms and policies.

In a simple format and friendly layout, issues will be analyzed using simple language without sacrificing either precision nor substantial content.

This first number of this series is titled *The FAO International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: Contributions for its Application and Implementation in Peru*. It does not constitute a detailed analytical document but, on the contrary, seeks to describe the background and basic content of the Treaty and reflect advances in its implementation at the national level. A series of final recommendations to promote its effective application in Peru have been included.

This series is part of the project *Support for the Implementation of the FAO International Treaty in Peru* undertaken by the Peruvian Society for Environmental Law in cooperation with the Fridtjof Nansen Institute of Norway, the Grupo Yanapai and the Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) of Germany. The series is also supported by Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Introduction

Peru ratified the Treaty through Supreme Decree 012-2003 RE of January 27, 2003.¹

The International Treaty is a relatively recent policy effort to address access to genetic resources and provide a legal and institutional framework to implement basic principles of the Convention on Biological Diversity (CBD). In this case, the Treaty covers an important set of resources - plant genetic resources for food and agriculture.

Plant genetic resources for food and agriculture are critical to guarantee food security of the world's population and the implementation of the Right to Food. Although some countries such as Peru are centres of origin and diversification of many genetic resources (including for food and agriculture), all countries around the world are *interdependent* regarding resources their agriculture systems use, promote, contribute and develop.

In the case of research and development of genetic resources in the field of pharmaceuticals it is "easier" to set bilateral rules and obligations on access and distribution of benefits between and among countries. However, in the case of food and agriculture, interdependence calls for a different solution which prioritize permanent flow, exchange and collaboration among countries, over restriction and control. Agriculture in all countries around the world has developed during centuries based on this exchange and flow of genetic resources.²

1 The Treaty was adopted during the Thirty First Session of the FAO Conference on November 3rd, 2001 and entered into force on June 29th, 2004.

2 In the case of Peru for example, agriculture depends on more than 60% of exotic plant genetic resources, which are not native to the country. The dependence of other countries and regions on foreign plants is sometimes greater. Rice, barley, asparagus, artichoke, wheat, mangoes, sugar, etc. are all exotic and introduced crops in Peru, but nevertheless very important in terms of export agriculture (including agro-industry in general).

*The author would like to thank the comments of: Annette von Lossau, Regine Andersen and Maria Scurrah, also to Juan Torres for the photos.

For this reason, a Multilateral System on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Distribution of Benefits has been created, as an integral part of the International Treaty, which will be analyzed in detail further below.

Background and international context of the International Treaty

The 1983 International Undertaking on Plant Genetic Resources was the first international legal instrument to address the issue of control and rights over plant genetic resources for food and agriculture. In spite of its non-binding nature, it determined the policy and conceptual framework from which the debate on access to, control of and rights over crop genetic resources expanded, strengthened and allowed developing countries holding biodiversity to openly claim recognition of their rights, interests and expectations.

The Undertaking recognized the universally accepted principle -at that time- that genetic resources (and plant genetic resources in particular) were part of the common heritage of mankind and, therefore, property rights were not possible.

During the 80's, the Undertaking adopted a series of resolutions which interpreted its principles, the most important being Resolutions 4/89 and 3/91 which recognized that breeders rights were not incompatible with the Undertaking and that the idea of free access proposed by the notion of patrimony or common heritage did not imply access free of cost, respectively. Furthermore, Resolution 3/91 also recognized that Farmers Rights were a critical component of the Undertaking.

In the early 90's, negotiations of the Convention on Biological Diversity (CBD) were being culminated. Originally conceived essentially as a "green" convention, oriented towards protecting biodiversity of the planet, discussions soon included interests and expectations of developing countries seeking to recapture the debates regarding issues of access, control over genetic resources and intellectual property.

As a result, the CBD established as its objectives: conservation of biodiversity, sustainable use of its components and sharing in a fair and equitable way (with countries of origin), the benefits arising from access to and use of genetic resources. The CBD incorporated a complete article (Article 15) addressing the issue of access to genetic resources and distribution of benefits, recognizing sovereign rights, prior informed consent, mutually agreed terms, among others. It also incorporated articles and specific references to biotechnology, technology transfer and intellectual property (Article 16 and 19). As a result of the CBD and very rapidly, many countries adopted and began to develop specific norms on access to genetic resources and distribution of benefits.³

The dynamics of the CBD has generated new processes and initiatives which include: the formation of the Like-minded Group of Megadiverse Countries,⁴ adoption of Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits⁵ and launching of a new negotiation process oriented towards creating an international regime on access to genetic resources.⁶ Added to this, the CBD triggered the revision process of the International Undertaking and its adaptation to new rules on access and distribution of benefits, resulting in the development and adoption of the International Treaty.

3 For further details on countries which have adopted legislation and policies on access matters, review: Carrizosa, S., Brush, S., Wright, B., McGuire, P. (Eds) 2004. *Accessing Biodiversity and Sharing the Benefits: Lessons from Implementing the Convention on Biological Diversity*. IUCN Environmental Policy and Law Paper 54. IUCN Environmental Law Programme, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, United Kingdom.

4 The Group of Like-Minded Megadiverse Countries which includes countries concentrating more than 75% of *in situ* biodiversity on the planet, was established through the Cancun Declaration of February 2002. Members of this Group are: Bolivia, Brazil, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Philippines, India, Indonesia, Kenya, Malaysia, Mexico, Peru, South Africa and Venezuela. The Groups main objective is to coordinate policies and common actions oriented towards strengthening negotiating positions on biodiversity matters, at different international forums – mainly on issues related to access to genetic resources and protection of traditional knowledge.

5 These Guidelines are a non-binding instrument adopted through Decision VI/24 (The Hague, The Netherlands, 2002), which establishes a menu of options for countries to consider when engaging in policy and normative processes related to access to genetic resources.

6 The idea of promoting a policy process to negotiate an international regime was originally proposed by the Like-minded Group of Megadiverse Countries in 2002. The Group has insisted on these proposals at successive forums until finally, through Decision VII/19 of the COP to the CBD (Kuala Lumpur, Malaysia, 2004), this process was launched officially. For a critical review of this process, see: Ruiz, Manuel. The International Regime on Access to Genetic Resources: In Search of the Right Path. Policy and Environmental Law Series. Peruvian Society for Environmental Law. No. 17, January 2006, Lima, Peru. Available at: <http://www.spda.org.pe>

Central elements of the International Treaty: how will it operate in practice?

The International Treaty's objectives are the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture and the fair and equitable distribution of benefits arising out of their use.⁷

The Treaty calls upon Contracting Parties to adopt measures to promote the development of surveys and inventories, undertake collection activities, carry out actions to support the effort of small farmers, implement measures oriented to *in situ* conservation, among others. Furthermore, contracting Parties are responsible for promoting the sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture, strengthening research activities and conservation of plant genetic resources, promoting plant breeding efforts with small farmers and the use of underutilized species, among others.

One of the important issues addressed by the Treaty is Farmers Rights. Farmers' Rights are the recognition made by Parties to the contribution by small farmers over time, mainly in centres of origin and diversity, in the conservation and development of plant genetic resources for food and agriculture. In this regard, Contracting Parties are responsible for realizing Farmers' Rights at the national level, mainly through the protection of traditional knowledge related to plant genetic resources, recognizing the right to participate in the sharing of benefits arising from the utilization of these resources and the right to participate in national policy processes related to conservation and sustainable use of these resources⁸. Farmers' Rights also imply that nothing will limit any rights that farmers have to save, use, exchange and sell farm-saved seed/propagating material, subject to national law.⁹

A second key element in the Treaty is the recognition to the States sovereign rights over their own plant genetic resources and, in the exercise of sovereignty, countries agree to establish a Multilateral System on Access and Benefit-Sharing which is based on the notion of *facilitated access*.

The rules and principles of the Multilateral System are applied exclusively to resources listed in Annex I,¹⁰ under the management and control of the Contracting Parties and in the public domain. Plant genetic resources listed in Annex I held in International Agricultural Research Centres are also included. Excluded from the System are plant genetic resources over which there are private property rights, including intellectual property.

Under the Multilateral System, access will be provided solely for the purpose of research, breeding and training for food and agriculture, provided that such purpose does not include pharmaceutical, chemical and/or other uses. In the case of multiple-use resources, their importance for food security should determine their inclusion in the Multilateral System and availability under facilitated access. Access shall be granted expeditiously and free of charge, without the need to track the origin of each sample.

As a distinct and controversial element of the Treaty and the Multilateral System, recipients of these resources shall not claim intellectual property on the resources and their components that limit facilitated access, in the form received from the Multilateral System. This is an issue which is being debated. For some, resources obtained from the System and improved can be the subject of intellectual property as can component part of these resources. Others argue that the letter and spirit of the Treaty seek to impede granting of intellectual property rights over resources (and components) of the list altogether.

⁷ For further details on the treaty see: Moore, Gerald, Tymowski, Wytold. *Explanatory Guide to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*. Environmental Law and Policy Paper No. 57. IUCN The World Conservation Union. (IUCN). 2005. See also: Andersen, Regine. *Governing Agrobiodiversity: International Regimes, Plant Genetics and Developing Countries*. Department of Political Sciences, University of Oslo. 2007.

⁸ Ruiz , Manuel (2006). *Farmers Rights in Peru - a Case Study*.A Case Study, Background Study 3 from the Farmers Rights Project, FNI Report 5/2006 (Lysaker, Norway, The Fridtjof Nansen Institute

⁹ Law 27262 and its regulation (Supreme Decree 040-2001-AG) – according to some national experts – may have a negative impact on free and traditional seed exchange practise of small farmers given the goal of “formalizing” and certifying seed production according to modern, technical agronomic and phytosanitary criteria.

¹⁰ This list includes list of taxa crops under the Multilateral System. It includes 35 species and 29 forages.

Access to plant genetic resources found in *in situ* conditions shall be provided according to national legislation without prejudice to other provisions and norms of the Treaty. Facilitated access shall be provided pursuant to the Standard Material Transfer Agreement (SMTA) adopted by the Governing Body.

In relation to benefit sharing, facilitated access is, in itself, a major benefit. The distribution of benefits shall be materialized through: the exchange of information, access to and transfer of technology, capacity-building and sharing of monetary and other types of benefits. These benefits should flow primarily, to farmers in developing countries who conserve and sustainably use plant genetic resources for food and agriculture.

Finally, the International Agricultural Research Centres of the Consultative Group on International Agricultural Research maintain important *ex situ* collection of plant genetic resources for food and agriculture. These resources (included in Annex I) shall be made available in accordance with the provisions and principles of the Multilateral System – including through the application of MTAs. International Centres shall sign agreements with the Governing Body in order to place their collections under the Multilateral System.

Some advances in the policy and normative processes in Peru



Over the past few years, Peru has made progress in the development of public policies and laws and regulations regarding agrobiodiversity and related issues. Progress has also been made in the implementation and application of the International Treaty. Even before the Treaty entered into force, Peru has been generating a series of mechanisms, instruments, norms and processes which at present, reflect progress in terms of the application of the Treaty particularly in the area of genetic resources, traditional knowledge protection, agrobiodiversity and biosafety.

Among the most important examples of institutional policy and regulatory efforts in the field of conservation, sustainable use and specific projects, the following stand out:

Law 26839 on Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity (1996). This is the general norm for the conservation of biodiversity in Peru and includes specific reference to agrobiodiversity. In particular, its Regulation (Supreme Decree 068-2001) provides the creation of Agrobiodiversity Zones to promote *in situ* conservation of agrobiodiversity -mainly in small farms- specifically of plant genetic resources for food and agriculture.¹¹

Law 27104 for the Prevention of Risks from the Use of Biotechnology (1999). This norm and its regulation are a safeguard against the uncontrolled introduction of transgenic organisms into the country. Their objective is to guarantee adequate levels of conservation of the rich and diverse domesticated and wild biological wealth the country has.

Supreme Decree 102-2001-PCM, National Biological Diversity Strategy (5-9-2001). This is the main instrument for biodiversity planning. It includes specific actions in the fields of conservation and sustainable use of agrobiodiversity.

¹¹ Agrobiodiversity Zones seek to ensure that, through maintenance of indigenous cultures and traditional practices in the management of farming fields (especially regarding native crops and their wild relatives), agrobiodiversity as a whole can be conserved. Incentives to create these areas include: national and social recognition of “conservationist” farmers, banning of transgenic seeds and high input agriculture practices, promotion of participatory plant breeding, among others.

Law 27811 on a Protection Regime for the Collective Knowledge of Indigenous Peoples Derived from Biological Resources (2002). This law is an effort to protect the collective knowledge of indigenous peoples (including farmers' communities) related to biodiversity in general. It establishes a series of mechanisms and instruments (licences, registers, fund, etc.) to protect the intellectual effort of indigenous groups related to biodiversity.¹²

Ministerial Resolution 505-2003.AG, Regulation on market fairs and agricultural events. This regulation seeks to promote spaces in which farmers may exchange products and seeds, and offer their products mainly to local and regional consumers.

Law 28216 for the Prevention of Biopiracy (2004). As a result of a number of cases of illegal and irregular use of national biodiversity resources (and associated traditional knowledge), mainly from the application of intellectual property rights, a National Commission for the Prevention of Biopiracy is created, lead by the National Institute for the Defence of Competition and Intellectual Property (INDECOPI). Its main goals are to coordinate preventive actions and defend national interests.¹³

Law 28477 which declares crops and native and wild species as the National Natural Patrimony (2004). Native crops and their wild relatives are part of the National Natural Patrimony and the Ministry of Agriculture in coordination with Local and Regional Governments (and the private sector), is responsible for ensuring their registration, promotion, development, conservation, commercialization, among others.

Decree of the National Environmental Council 022-2004/CODNAM/CD, The National Agrobiodiversity Programme is Approved. This document is the first coordinated effort to define a coherent national programme to promote, conserve and sustainably use agrobiodiversity in the country.

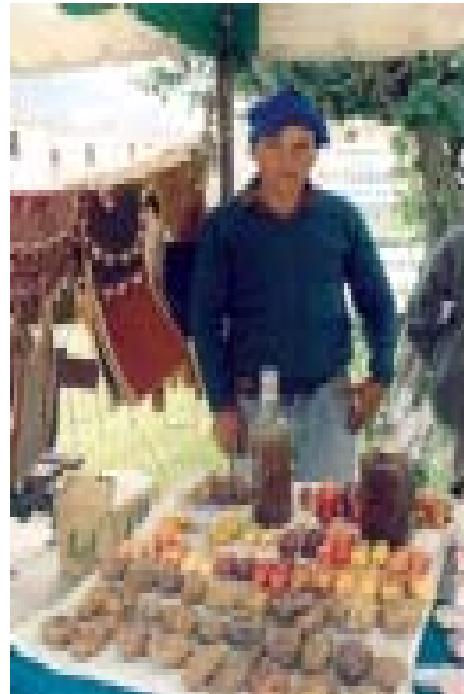
Decree of the National Environmental Council 020-2005/CODNAM/CD, Creation of a National Technical Group on Genetic Resources. The objective of this Technical Group is to establish a multi-sectorial discussion space to define policies and measures on matters related to the access of genetic resources in general.

Genetic Resources Policy Initiative Project (GRPI Peru). This Project promoted by Biodiversity International (formerly International Plant Genetic Resources Institute – IPGRI) and under coordination of the Peruvian Society for Environmental Law, seeks to support the generation of public policies on matters related genetic resources, agrobiodiversity areas and in the implementation of the International Treaty in Peru.

Potato Park Project. This initiative by an organization called "Asociación Andes del Cuzco" (implemented in six communities of the Pisac area), is an effort to create an agrobiodiversity area, conserving livelihoods, plant genetic resources and native crops, ancestral agricultural techniques and traditional knowledge of these communities by creating a local registry.¹⁴

In regards to the national legal framework on access to genetic resources in general (established by Decision 391 of the Andean Community on a Common Regime on Access to Genetic Resources), there are still pending issues surrounding the relation between the regime imposed by Decision 391 (broad and general) and the International Treaty (more narrow and specific).

These are all different examples of efforts to implement different aspects of the International Treaty, including conservation of agro-



12 In the case of Law 27811, although it makes no specific reference to Farmers Rights, given it protects traditional knowledge related to biodiversity in general, its scope also extends to knowledge related to plant genetic resources for food and agriculture in particular and therefore refers by extension to an element of Farmers Rights.

13 For information on biopiracy cases on resources of Peruvian origin, see: Comisión Nacional de Prevención de la Biopiratería. *Análisis de Potenciales Casos de Biopiratería en el Perú. Documentos de Investigación.* SPDA, Año I, N° 3, septiembre de 2005.

14 The Potato Park in Cusco is an example of an Agrobiodiversity Zone (<http://www.andes.org.pe>)

¹⁵ There are various efforts in the country which, unconsciously, are actually implementing certain elements of Farmers Rights. For example, a recent efforts by the International Potato Centre to develop a catalogue of native potatoes of Huancavelica, has required that prior informed consent form communities be obtained.

biodiversity, sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture, implementation of Farmers Rights,¹⁵ among others.

However, these do not represent necessarily systematic, integrated, continued nor coordinated efforts to raise awareness about the International Treaty nor, ultimately, implement its provisions. Following are a few suggestions to improve this situation in the case of Peru:

Recommendations to strengthen the International Treaty implementation process in Peru.

1. The FAO International Treaty is hardly known among the majority of actors who may actually have interests related to it. From governmental agencies to small farmers and research centers, little or nothing is known about the implications and possibilities the Treaty provides. In this regard, it would be useful to *initiate a dissemination process of its content, among a wide spectrum of key actors and groups of interest*. The media (reports, articles, radio programs, television documentaries, etc.) could play an important role. Also, through workshops, decentralized meetings, distribution of bulletins, among others, the existence and content of the Treaty could be widely disseminated. The National Environmental Council (CONAM) and the National Institute for Agriculture Research (INIA) should play a leading role. Organizations such as SPDA, GTZ, Bioversity International and CIP could also support these efforts.
2. INIA, CONAM and the National Coordinator for the Consultive Group on International Agricultural Research (CGIAR), should initiate specific and coordinated actions not only to contribute to the dissemination process, but more concretely, to the effective application of the Treaty at the national level. The following actions are suggested:
 - a. *Specifically define* the national competent authority responsible of the application and follow-up of the International Treaty.
 - b. *Request* (through CONAM or INIA) the Andean Community the adoption of a Decision to expressly exclude resources in Annex I from the rules and procedures established in Decision 391 on a Common Regime on Access to Genetic Resources.
 - c. *Incorporate* the Standard Material Transfer Agreement into the regular and daily practice of national institutions maintaining resources of Annex I. These may include: *ex situ* centers, universities and even botanic gardens.
 - d. *Undertake* an intensive training process between officials of the private sector (especially their own institutions) in order to acknowledge and understand the implications of the Treaty and its provisions. This should be led by CONAM in coordination with INIA and also include the Ministry of Foreign relations as an active participant.
 - e. *Establish* a mechanism to verify compliance of provisions of the International Treaty in general and Farmers' Rights in particular. This could be achieved through the preparation of an annual or biannual report to be discussed within the framework of National Biodiversity Commission, the National Technical Group on Access to Genetic Resources or other institutions which may contribute to improved implementation of the Treaty and its obligations. This report could include specific references to relations between traditional exchange of seeds and Free Trade Agreements or WTO rules, how may genetically modified seeds affect farmers socially, culturally and economically, among other more targeted issues. This report could be prepared by INIA in coordination with CONAM and consultation with different stakeholders involved in and affected by Treaty Provisions.
 - f. *Undertake* – through the Peruvian Mission in Geneva – a continued follow up of relevant policy processes within WTO and WIPO. These may include discussions regarding: Farmers Rights, access to genetic resources, protection of traditional knowledge among others.

- g. Disseminate relevant information regarding the International Treaty among the private sector – agriculture unions in particular. SPDA could prepare initial list of private sector relevant actors and information to be distributed could include this policy brief, GTZ thematic papers, etc.
- 3. The National Network of *Ex Situ* Conservation Centers must initiate an awareness raising process among its members regarding content of the International Treaty and the use of the Standard Material Transfer Agreement, in order to support their implementation and application according respectively. These could be coordinated by CONAM and involve active involvement of institutions such as the National Museum of History, SPDA, INIA, among others.

Suggested bibliography (Bibliografía y fuentes de información recomendada)

- Andersen, Regine. *Governing Agrobiodiversity: International Regimes, Plant Genetics and Developing Countries*. Department of Political Sciences, University of Oslo. 2007.
- Biber-Klemm, Susette and Cottier, Thomas (Editors). 2006. *Rights to Plant Genetic Resources and Traditional Knowledge. Basic Issues and Perspectives*. World Trade Institute. United Kingdom.
- Carrizosa, S., Brush, S., Wright, B., McGuire, P. (Eds.) 2004. *Accessing Biodiversity and Sharing the Benefits: Lessons from Implementing the Convention on Biological Diversity*. IUCN Environmental Policy and Law Paper 54. IUCN Environmental Law Programme, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, United Kingdom.
- Cooper, David. *The International Treaty on Plant Genetic Resources*. In: RECIEL 11 (1) 2002.
- GTZ. 2006. La agrobiodiversidad – clave para la seguridad alimentaria. Hojas temáticas “People, Food and Bioversity”. Disponible en: <http://www.gtz.de>
- Lapeña, Isabel, Ruiz, Manuel. (Editores). *Acceso a Recursos Genéticos. Propuestas e instrumentos jurídicos*. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Lima, mayo de 2004.
- Pistorious, Robin. 1997. *Scientists, Plants and Politics. A History of the Plant Genetic Resources Movement*. IPGRI, Rome.
- Ruiz, Manuel. *The International Regime on Access to Genetic Resources: In Search of the Right Path*. Policy and Environmental Law Series. Peruvian Society of Environmental Law. No. 17, January 2006, Lima, Peru.
- Ruiz, Manuel. *La Protección de los Conocimientos Tradicionales. Avances Políticos y Normativas en América Latina*. SPDA, GTZ, Lima, 2006.
- Ruiz, Manuel. *Farmer’s Rights in Peru. A Case Study*. Background Study No. 3. FNI Report 5/2006. Farmer’s Right Project. Supported by GTZ. Disponible en: <http://www.spda.org.pe>
- Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. *Informe del Seminario Regional sobre Acceso a los Recursos Fitogenéticos en la Región Andina: el Convenio sobre la Diversidad Biológica, La Decisión 391 y el Tratado Internacional de la FAO*, CIP, SPDA, 2004.
- Valladolid, Julio. Kawsay Mama. *Madre Semilla. Importancia de la Conservación In Situ de la Diversidad y Variabilidad de las Plantas Nativas Cultivadas y sus Parientes Silvestres y Culturales en la Región Andino Amazónica del Perú*. Serie Kawsay Mama, Agosto, 2005, Lima, Perú.

Suggested web sites (Páginas web recomendadas)

- <http://www.bioversity.org>
<http://www.gtz.de>
<http://www.proyectoinsitu.org>



La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1986, que trabaja en la áreas de Derecho y Política Ambiental. La SPDA se organiza en cinco programas: • Asuntos Internacionales y Biodiversidad • Conservación • Investigación • Política y Gestión Ambiental • Defensa del Interés Ciudadano.

Realiza trabajos de asistencia técnico/legal y consultoría, ejecuta proyectos específicos y promueve y difunde el Derecho Ambiental a través de su centro de información y actividades de capacitación.

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

Presidente: Jorge Caillaux **Director Ejecutivo:** Manuel Pulgar Vidal

Coordinador del Proyecto Apoyo a la Implementación del Tratado Internacional de la FAO en el Perú: Manuel Ruiz Muller, Director del Programa de Asuntos Internacionales y Biodiversidad de la SPDA, mruiz@spda.org.pe

Prolongación Arenales 437, San Isidro, Lima 27. <http://www.spda.org.pe>
Teléf.: (511) 422 2720 / 441 9171 Fax: (511) 442 4365

© 2007 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit